

**Informe jurídico 0141/2008**

La consulta plantea si resulta conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, la comunicación de certificados de empadronamiento de terceras personas a la que los asistentes sociales, tramitan el expediente de la Ley de dependencia.

En relación con el objeto de la cuestión, debe indicarse que la comunicación de datos solicitada constituye, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 i) de la citada Ley Orgánica, una cesión de datos de carácter personal, definida como “Toda revelación de datos efectuada a persona distinta del interesado”.

El artículo 11 de la misma norma establece con carácter general el régimen de tales cesiones, indicando su apartado primero que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”, estableciendo el apartado 2. a) de dicho artículo entre las excepciones a dicha exigencia que la cesión esté autorizada en una Ley.

Además, en relación con el padrón municipal de habitantes, dispone el artículo 16.3 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, redactado conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, que “Los datos del Padrón municipal se cederán a otras Administraciones Públicas que lo soliciten sin consentimiento previo del afectado solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. También pueden servir para elaborar estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico, en los términos previstos en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública y en las leyes de estadística de las comunidades autónomas con competencia en la materia”.

Fuera de estos supuestos, debe entenderse que los datos del Padrón son confidenciales y el acceso a los mismos se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter

Personal y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Agencia Española de Protección de Datos ha considerado que la expresión “datos del Padrón municipal” que se emplea en el artículo 16.3 de la Ley de Bases de Régimen Local se refiere únicamente a los datos que en sentido propio sirven para atender a la finalidad a que se destina el Padrón municipal: la determinación del domicilio o residencia habitual de los ciudadanos, la atribución de la condición de vecino, la determinación de la población del municipio y la acreditación de la residencia y domicilio. Por ello, cualquier cesión de los datos del Padrón deberá fundarse en la necesidad por la Administración cesionaria, en el ejercicio de sus competencias, de conocer el dato del domicilio de la persona afectada, dado que del artículo 4.2 de la LOPD se deriva la imposibilidad del tratamiento de los datos para fines diferentes de los que motivaron su recogida, salvo que así lo consienta el afectado o la Ley lo prescriba.

Como puede observarse, las cesiones reguladas en dicha norma exigen por un lado, que los datos sean preciso para el ejercicio de competencias de las que los distintos órganos sean titulares, y por otro, que el domicilio o residencia de las personas inscritas en el Padrón sean datos precisos para su ejercicio, sin que por otra parte sean requisitos precisos para la misma la afectación por un concreto procedimiento administrativo de los titulares cuyos datos van a cederse.

Fuera de tales supuestos, las cesiones de los datos padronales deben ajustarse plenamente a la LOPD, y en concreto, a su artículo 11 que regula la cesión de datos de carácter personal, estableciendo como regla general la necesidad del consentimiento previo e informado de las personas cuyos datos van a ser cedidos, salvo cuando concurra alguno de los supuestos regulados en el apartado segundo del mismo.

Así, el facilitar a una persona sus propios datos personales obrantes en el padrón, por ejemplo a través de la certificación correspondiente (que constituye además un documento público fehaciente a todos los efectos administrativos, como establece el artículo 16. 1 LBRL), no constituye una

cesión de los mismos, a tenor de la definición que de la misma recoge el artículo 3 j) de la LOPD, ya que es preciso para que la misma se dé que la revelación de los datos se produzca a una persona distinta del interesado.

Sin embargo, si se producirá la cesión si, al facilitar al petionario sus propios datos, se le facilitan los de otras personas, por lo que en tal caso, y dado que al no tratarse de una cesión a otra Administración pública no será de aplicación el artículo 16. 3 de la LOPD, deberá ajustarse la misma al artículo 11 LOPD antes citado, y así, se requerirá como regla general el consentimiento de los afectados, que puede obtenerse a través de una autorización por escrito, de aquellos de quienes se pretenden obtener los datos.

Además este es el mismo criterio que el señalado en la Ley 39/2006, de 14 diciembre, de Asistencia Social pues el artículo 28 que regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema, señala que “1. El procedimiento se iniciará a instancia de la persona que pueda estar afectada por algún grado de dependencia o de quien ostente su representación, y su tramitación se ajustará a las previsiones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las especificidades que resulten de la presente Ley.